

El debate de la reforma tributaria, que los aliados del Gobierno impiden hacer, sigue el martes. Petro advierte que sin ley habrá emergencia económica.

Este martes, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputará al exconcejiller Álvaro Leyva por el sonado escándalo de los pasaportes.

DOMINGO

EL TIEMPO 7 DE DICIEMBRE DE 2025

@ElTiempo

Primer plano

“Se alteró deliberadamente la independencia del Congreso. Se pervirtió la función administrativa. Esto no fue un diálogo entre ramas del poder, fue un acuerdo delictivo. En este asunto se evidencian unos intereses políticos sin límite que, obviamente, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla articulaban a través de terceros, tratando de no ser detectados en sus actos de corrupción”.

Esos fueron los términos de la fiscal María Cristina Patiño para pedir esta semana la detención preventiva de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, hasta hace menos de un año de los funcionarios más importantes del sene-drín del presidente Gustavo Petro. Los dos fueron imputados por presuntamente utilizar los millonarios contratos de la UNGRD y de Inviás para comprar apoyos en las reformas sociales del Gobierno, que vio además a una de sus principales escudadoras, la senadora Martha Peralta, señalada por la Fiscalía como una de las fichas clave en el escándalo de corrupción que se desató en los comienzos del 2024, con el caso de los carnotanques de la Jaguirá, y que sigue sacudiendo a la Casa de Nariño.

Alagrada de las acusaciones contra sus exministros que se suman a las órdenes de captura contra los prófugos Carlos Ramón González (exjefe del Dapre y la Dirección de Inteligencia) y César Manrique (exjefe de la Función Pública), el presidente Gustavo Petro respondió con un solitario trino en el que aseguró que el “despidió a tiempo” a quien “pretendía hacer cupos de contratación para parlamentarios”, en alusión a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que salió del Gobierno cuando el escándalo estalló gracias a las denuncias de los medios. En julio del año pasado, el presidente Petro le pidió perdón al país por haber nombrado a López, su excompañero en la AD-M19.

Pero hasta hoy ha evitado referirse a fondo a los cargos criminales en contra de esos exaltos funcionarios que él nombró directamente -Velasco, Bonilla, González, Manrique y Sandra Ortiz, exconsejera de las Regiones- y que salpican el trámite de sus reformas sociales, aprobada en el Congreso y pendiente de un fallo de la Corte; y de salud, que sigue enredada en el legislativo.

Desviación de contratos
En el radar de la opinión pública estaba claro que la plata de la Gestión del Riesgo habría sido usada para lograr que parlamentarios de la Comisión de Crédito Público accedieran a darle el sí a varios empréstitos internacionales pedidos por el Gobierno. De hecho, seis de esos parlamentarios están pendientes de una decisión de la Corte Suprema en sus casos. Pero ahora la fiscalía de Luz Adriana Camargo asegura que dos de los proyectos bandera del llamado ‘gobierno del cambio’ fueron impulsados a través de coimas con plata de la contratación directa de la UNGRD y de Inviás, que, según la investigación, fueron “la caja menor para sacar dinero en favor de parlamentarios”. Es una hipótesis que encaja con la de la Corte



La Fiscalía imputó a los exministros Luis F. Velasco y Ricardo Bonilla por los casos de la UNGRD e Inviás. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

caía lo comprometen en el entramado.

En el proceso hay decenas de mensajes cruzados entre Oyuela y María Alejandra Benavides, que, según los investigadores, demuestran que tenía incidencia y manejo sobre los famosos cuadros de Excel en los que las entonces asesoras del minihacienda manejaban la relación de contratos entregados a congresistas a cambio de su apoyo. En sus declaraciones ante la justicia buscando beneficios, Benavides señala a Oyuela como “el enlace” en Inviás.

Precisamente, para septiembre de 2023, cuando Benavides y Oyuela cruzaron decenas de mensajes, en el Senado se discutía la reforma pensional y en la Cámara estaba la de la salud. Cada una surgió su debate en las comisiones séptimas.

Para promoverlos ilegalmente, según la Fiscalía, los exministros habían accedido a desviar 79 proyectos de las dos entidades, aunque del instituto solo se materializaron tres: en Loria por \$ 8.500 millones, en Los Córdoba por \$ 4.500 millones, y en Tierralora por \$ 2.700 millones, para un total de \$ 15.700 millones. Por esos hechos, ambos fueron imputados por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Mientras la bola de nieve de los manejos corruptos en la UNGRD sigue creciendo, los escándalos continúan rondando los pasillos de la Casa de Nariño. El viernes, la Fiscalía llamó a interrogatorio a Ricardo Roa, el exgerente de la campaña presidencial del 2022 y hoy presidente de Ecopetrol, por el caso del apartamento comprado por debajo de precios del mercado a un empresario del sector petrolero, revelado por EL TIEMPO.

También esta semana, la Fiscalía pidió cárcel para Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por el desvío de plata de subsidios para ancianos de bajos recursos en el Atlántico. Nicolás Petro ya está en juicio por el escándalo de la plata no declarada que supuestamente pidió a nombre de la campaña de su papá en 2022 y que desvió hacia sus gastos personales. Entre tanto, las investigaciones penales por la violación de topes electorales en el 2022 -que ya dio lugar a condena administrativa y sanción en el Consejo Nacional Electoral- y por la presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, que le responde directamente a la Presidencia, empiezan a moverse.

Congresistas, bajo lupa
En el ejemplo mapa de corrupción que investiga la Fiscalía aparece también como uno de los principales beneficiarios el senador Julio Elias Chagüí, el día oficialista de la U y que integra la Comisión Primera. El testimonio de María Alejandra Benavides al equipo de fiscales del caso ha sido clave para establecer cómo Chagüí entra en este capítulo. Según la exasesora, beneficiada con un principio de oportunidad total, el exministro Velasco le habría pedido que se viera con el senador para hablar de los tres contratos. En el encuentro, el legislador le habría manifestado que representaba a

Inviás, el otro capítulo de corrupción que salpica al Gobierno y sus reformas

Chats, testimonios y documentos en poder de la Fiscalía apuntan a un ‘pacto criminal’ con el que se habrían direccionado 79 contratos en Inviás y la UNGRD. Juan José Oyuela, exdirectivo, bajo la lupa.

CARLOS LÓPEZ - REDACCIÓN JUSTICIA | @CarlosL49 | carben@eltiempo.com

LOS NOMBRES CLAVE EN LOS ESCÁNDALOS DE INVIÁS Y LA UNGRD

Exfuncionarios imputados



Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda



Luis F. Velasco, exministro del Interior



María A. Benavides, exasesora del ministerio de Hacienda

*Recibió un principio de oportunidad.

Exfuncionarios en la cárcel



Sandra Ortiz, exconsejera presidencial



Olmedo López, exdirector de la UNGRD



Snyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD

Exfuncionarios prófugos

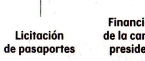


César Manrique, exdirector de la ANT



Carlos Ramón González, exjefe del Dapre

OTROS ESCÁNDALOS QUE RODEAN AL GOBIERNO PETRO



Licitación de pasaportes
Álvaro Leyva, exconcejiller



Financiación de la campaña presidencial
Ricardo Roa, exgerente



Presunto enriquecimiento ilícito
Nicolás Petro, exdiputado



Posibles nexos con las disidencias
Juan Miguel Huertas, general del Ejército



Posibles nexos con las disidencias
Wilmar Mejía, funcionario de la DNI

Fuente: Fiscalía

intensa la discusión de las ‘reformas sociales’. Ella anunció esta semana que intentará volver al Congreso, ya no por el Pacto Histórico, sino por la circunscripción indígena. La audiencia de esta semana marca, además, la apertura de un nuevo frente del escándalo: el uso de las partidas de Inviás, una entidad que, como la UNGRD, tiene

la posibilidad de contratación directa en situaciones de emergencia. El proceso sostiene que, presuntamente siguiendo instrucciones de los entonces ministros Velasco y Bonilla, las asesoras María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez (también investigadas) distribuyeron claves para facilitar dadas entre parlamentarios; no solo a través de Olmedo

López y Snyder Pinilla (exdirector y exsubdirector de la UNGRD, ambos con beneficios), sino a través de altos funcionarios de Inviás. En concreto, la Fiscalía sí exige el rastreo de las actuaciones de Juan José Oyuela, nombrado en enero de 2023 como director de Ejecución y Operación de entidades. Chats, testigos y documentos en poder de la Fis-